

El problema del sector público español, más que de peso, es de eficiencia



18.12.2011 | M. G. Mayo | Gráfico: C. Galera.



Mariano Rajoy **ya ha anunciado que va a realizar ajustes urgentes en la Administración**, con un redimensionamiento del sector y del personal. Aunque el tamaño de la española es similar a la británica y mayor que la francesa e italiana, los indicadores de eficiencia están alejados de la media de la OCDE.

Si las elecciones autonómicas y municipales del pasado 22 de mayo marcaron el pistoletazo de salida de los recortes autonómicos, el cambio de Gobierno central parece que va a acelerar la reforma del conjunto de la Administración. Rajoy ya ha marcado sus líneas de actuación: se congela la oferta de empleo, simplificación o supresión de organismos, menos gastos corrientes...

Y, aunque foco de la actualidad apunta directamente al sector público, hay muchos datos que no son apenas conocidos y resultan clave para entender las luces y sombras de su funcionamiento.

El estudio *'Las diferencias regionales del sector público español'*, elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la Fundación BBVA, pone de relieve que el peso de la Administración española en la economía no es muy diferente de la de otros países de nuestro entorno, eso sí la brecha entre comunidades es enorme.

En concreto, este informe subraya que en 2009, último año con datos internacionales disponibles, el valor añadido bruto de la Administración española (es decir, los servicios que genera este ámbito para la economía, que es una forma habitual para medir la dimensión del sector público por los economistas y que se refiere a la educación, la sanidad, los factores productivos del trabajo...) **representaba el 13,8% del producto interior bruto (PIB)**, mientras que el gasto público ascendía hasta 45,8%.

El peso de la Administración sobre el total de los productos y servicios que genera el país es menor que en Francia (donde supone el 16,4% del PIB) o Italia (13,8%). Y está ligeramente por encima de otros, como Reino Unido (13,1%), Polonia (12,9%) e, incluso, el tantas veces citado, Estados Unidos (12,5%).

Para **Francisco Pérez, director de investigación del Ivie que ha coordinado el estudio**, resulta especialmente llamativa la cercanía con EEUU. "Hemos elaborado esta estadística con datos de la OCDE y el FMI y normalmente sólo se incluyen estadísticas del gobierno federal, pero si se ve el conjunto la distancia entre España y EEUU es muy pequeña", explica.

Sin embargo, cuando se analizan los datos con más detalles, se encuentran peculiaridades propias de nuestro país. El rasgo principal es la brecha que existe entre comunidades **[ver gráfico]**. Por ejemplo, mientras que en País Vasco o Cataluña no llega a representar el 9% de PIB, en Castilla-La Mancha es del 18,8% y en Extremadura casi llega a ser una cuarta parte de su actividad económica total (en concreto, un 23,2% del PIB).



Según señala Pérez, la dimensión del sector público está directamente relacionada con la del privado. Así, indica que el fuerte peso de la Administración en Extremadura es en gran parte debido a que el sector productivo privado es muy débil. Para **Manuel Arenilla, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid**, también es relevante este indicador para analizar el nivel de intervencionismo estatal. “Indica los lugares con muchas subvenciones, por ejemplo”, explica.

¿Hay muchos funcionarios?

La plantilla pública española tampoco está muy distante de la de su entorno. Mientras que los empleados del conjunto Administración suponían en 2008 **el 12,3% del total de trabajadores**, en Italia era el 14,3%, en Reino Unido, el 17,4%, y en EEUU, el 14,6%; y en Dinamarca y Noruega superaba el 25%, según la OCDE, que cita datos de 2008.

Entonces, ¿cuál es el problema?

El problema surge cuando se analizan los opacos y escasos datos de eficiencia que hay sobre la Administración española. Es decir, la cuestión no es el tamaño, sino su funcionamiento. “Es cierto que en España hay menos funcionarios que en la media de la OCDE, pero cobran por encima que el resto y trabajan menos horas [la media de la OCDE son 1.742 horas y en España, 1.663 horas al año en 2010], por ejemplo”, advierte Manuel Arenilla.

Arenilla sostiene que la clave para evaluar la eficacia está en la gobernanza, o gestión de este sector, más que en el nivel de gasto público o su dimensión. Pérez apunta en la misma dirección. “Habitualmente se hacen juicios muy generales sobre la Administración sobre su tamaño y la plantilla. Pero es erróneo, hay que analizar aspectos concretos. El problema es que no hay muchas estadísticas”, añade Pérez.

Un reciente informe de la OCDE destaca, por ejemplo, que en la Administración española tiene grandes déficits en las políticas de evaluación del rendimiento. “No se mide la eficacia del sistema. Estamos en el puesto 27 de 31 países”, indica Arenillas. “Así que se contabiliza poco y los resultados no son buenos”, declara.

Otros indicadores, como los de gestión de recursos humanos, también evidencian malas notas en la Administración: el índice de políticas de administración del personal se sitúa en el puesto 27 de 33 y está por debajo de la media de la OCDE. “En desarrollo económico estamos en un nivel, y la gobernanza pública en otro”, añade.

Otra fórmula para medir la eficiencia es hacer cálculo rápido sobre los presupuestos dedicados a Educación por comunidades y las notas del informe de Pisa, de la OCDE, sobre Educación. Ahí se ve que no son las que más presupuesto dedican, las que mejores resultados obtienen. “Por ejemplo, País Vasco y Navarra son de los que más gastan y no las que mejores notas sacan. La Rioja es de las que mejores rendimiento obtiene, en cambio”, afirma Arenilla.

Soluciones: nuevo modelo de ajustes

Para Arenilla, aunque en un primer momento se han efectuado ajustes lineales en la Administración (en cuanto a sueldos, recortes del gasto...) para reducir el déficit, comienzan a plantearse alternativas con el cambio de políticas, algo que podría adecuarse más a los agujeros del sector.

“Estamos entrando en una nueva fase. Lo muestra la Generalitat catalana: hay servicios en los que no se puede recortar, incluso, hay otros nuevos que se deben crear. Sin embargo, existen otros que no tienen mucho sentido actualmente. En esto se está trabajando. Hay estudios que demuestran que las subvenciones en I+D+i no tienen efectos, por ejemplo. ¿Para qué mantenerlas? También hay administraciones que apenas externalizan servicios, por ejemplo, de limpieza. Algo inexplicable”, explica.

Otro problema, según Pérez, es que “la configuración del gasto apenas se ha modificado en las últimas décadas aunque haya cambiado el modelo de financiación autonómica. El flujo de transferencias ha sido prácticamente el mismo a lo largo del tiempo. No se ha hecho más que consolidar lo que se hacía con anterioridad, a pesar de los cambios. Y esto no se puede mantener”.

Los expertos consultados creen que no hay fórmulas exactas para mejorar esta coyuntura, pero que el camino es el análisis detallado del sector público y la búsqueda de una solución de forma conjunta y no por regiones. Los detalles de las recetas que el nuevo Gobierno utilizará para conseguir estos ajustes probablemente se conocerán en pocas semanas.